



Psicoperspectivas

ISSN: 0717-7798

revista@psicoperspectivas.cl

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Chile

Fernández, Roberto

El espacio público en disputa: Manifestaciones políticas, ciudad y ciudadanía en el Chile actual

Psicoperspectivas, vol. 12, núm. 2, -, 2013, pp. 28-37

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Viña del Mar, Chile

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=171028144004>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

El espacio público en disputa: Manifestaciones políticas, ciudad y ciudadanía en el Chile actual

Roberto Fernández
Universidad de Chile, Chile
robertof@uchile.cl

RESUMEN

A partir del año 2011 se han venido desarrollando en Chile y en el mundo una serie de manifestaciones políticas que se han caracterizado por una masiva apropiación del espacio público. En el presente trabajo, se revisan algunas características de esta apropiación urbana y se propone que los usos del espacio público para la manifestación política en la actualidad en Chile no solamente definen las formas de acción contemporáneas de los movimientos sociales, sino que participan de una reconfiguración de la ciudadanía. Esta ciudadanía se estaría alejando del tipo de ciudadano impuesto en las dos últimas décadas en el contexto del modelo cultural de la “reconciliación nacional”, caracterizado por su alejamiento de la conflictividad social y de la ciudad como espacio para expresarse políticamente. Las recientes manifestaciones políticas en Chile permiten pensar que ese tipo de ciudadano está siendo reemplazado por una ciudadanía mucho más activa, crítica al sistema económico y político, orientada a una mayor democratización y justicia social, y que se constituye en un uso intensivo del espacio público.

PALABRAS CLAVE

manifestaciones políticas, espacio público, conflictividad social, ciudadanía

Public space in dispute: political demonstrations, city and citizenship in Chile today.

ABSTRACT

Since 2001 a series of political manifestations have been taking place in Chile and the world that can be characterized as taking over the public space. In this article we review some of the features of this urban appropriation and propose that uses of public space for political manifestations in contemporary Chile not only define the format of contemporary social movements, but become a party in the reconfiguration of citizenship. This citizenship is moving away from the type of citizen imposed during the last two decades in the context of a cultural model of “national reconciliation”, characterized by its distance from social unrest and from the city as a space for political expression. Recent political manifestations in Chile lead one to think about this type of citizen is being replaced by a much more active citizen, one that is critical of the economic and political system, aimed at a greater degree of democratization and social justice, and establishes an intensive use of the public space.

KEYWORDS

political manifestations, public space, social unrest, citizenship

Recibido: 16 marzo 2013

Aceptado: 26 junio 2013

Cómo citar este artículo: Fernández, R. (2013). El espacio público en disputa: manifestaciones políticas, ciudadanía y en el Chile actual. *Psicoperspectivas*, 12(2), 28-37. Recuperado el [día] de [mes] de [año] desde <http://www.psicoperspectivas.cl> doi:10.5027/PSICOPERSPECTIVAS-VOL12-ISSUE2-FULLTEXT-278

ISSNe 0718-6924

Introducción

Desde el año 2011 se han desarrollado en diversos países una gran cantidad de manifestaciones políticas que han destacado por una masividad y cobertura mediática sin precedentes en varias décadas. La primavera árabe, las movilizaciones sociales contra el desempleo y los reajustes económicos en Europa, el movimiento de los “indignados” en España, las ocupaciones de los barrios financieros en Inglaterra y Estados Unidos y las manifestaciones en torno a la educación en Chile, han mostrado cómo este ciclo de protesta ha traído de regreso a las calles a ciudadanos de diferentes partes del mundo, aunque con motivos y contextos bastante diferentes entre sí. Como señala Roitman (2012, p. 27) “emergen fuerzas antihegemónicas contra el capitalismo global; su nacimiento está lleno de vicisitudes, pero algo las une: tratar de recuperar los espacios públicos clausurados por el totalitarismo invertido y cedidos a los mercados”.

Un elemento que cruza a todas estas expresiones de descontento es el deseo de profundización democrática y de ampliación de la participación ciudadana. En una columna de análisis del diario mexicano Vanguardia, Marcos Roitman (2011) sostiene que estas manifestaciones reflejan, tanto el descontento social respecto al sistema político y económico imperante, como la necesidad de recuperar una ciudadanía que promueva y defienda la libertad y la democracia.

Las actuales movilizaciones son el resultado de un lento proceso donde se reúnen fuerzas, experiencias, y el malestar se organiza.

Cuando se reivindica “democracia, libertad y justicia” y se protesta contra la corrupción de los partidos políticos, el poder omnímodo de banqueros y el capital financiero, las políticas de ajustes, el paro juvenil, el sistema electoral, la privatización de la salud, la enseñanza o el calentamiento global, se desnudan sistemas políticos donde prima la injusticia, la desigualdad y la explotación (Roitman 2011, p. 5).

Estas manifestaciones también se han destacado por su carácter predominantemente espacial, donde las calles y plazas de las ciudades se han convertido en parte constitutiva de las expresiones de descontento y organización ciudadana (Benski, Langman, Perrugoría y Tejerina, 2013). “El descontento se hace visible, se exterioriza, el malestar aflora a la superficie. El resultado inmediato es la recuperación de los espacios públicos. Se toman las plazas, convirtiéndolas en fortines de ciudadanía” (Roitman, 2011, p. 5). En este sentido, la ocupación del espacio público desde el año 2011 en adelante constituye la negación de un modelo de ciudad caracterizado por una ciudadanía pasiva sometida a lógicas de consumo y su reemplazo por el ejercicio de

una ciudadanía activa y crítica (Benski et al, 2013; Roitman, 2012). Y si bien el uso político del espacio público ha sido una forma de acción colectiva propia del repertorio de los movimientos sociales contemporáneos (Benski et al, 2013; Tarrow, 2004) y de la ciudadanía en general (Borja, 2003; Borja y Muxí, 2003; Crawford, 1995; Delgado, 2007), lo importante es destacar que las manifestaciones actuales rebaten los postulados de crisis o muerte del espacio público como espacio de expresión ciudadana, postulados que marcaron de forma importante la discusión sobre espacio público y ciudadanía en décadas anteriores (Crawford, 1995).

La situación en Chile no ha sido diferente. Como señala Garcés (2012), han tenido lugar importantes y masivas movilizaciones sociales y políticas, las que comienzan en Punta Arenas debido al aumento del precio del gas y, posteriormente, en Santiago en oposición al proyecto eléctrico HidroAysén, donde se reúnen más de cuarenta mil personas. En este mismo periodo, comienza el ciclo de movilizaciones relativas a las demandas del movimiento estudiantil para transformar el modelo educativo heredado de la dictadura militar, el que terminó sumando 75 marchas autorizadas en Santiago según los datos entregados por la Intendencia Metropolitana en su cuenta pública, cifra que no considera las marchas no autorizadas y las otras formas de movilización artístico-culturales llevadas adelante por los estudiantes. Dicha situación marca una diferencia significativa en las formas de movilización desarrolladas durante los gobiernos de post-dictatoriales, entre otras cosas porque contaron con el apoyo importante de una parte significativa de la población, tanto en su contenido como en sus estrategias de acción. Como señalan Mayol y Azócar (2011, p. 172):

Entendiendo que fundamentalmente el método de movilización fueron la protesta callejera, la performance en los espacios públicos, el paro de actividades docentes y la toma de establecimientos educacionales; se puede asumir que el dato representa un cambio significativo en la visión sobre la expresión pública del desacuerdo y la reivindicación de derechos.

Una de las características de estas movilizaciones fue justamente la creciente masividad de sus convocatorias y el consiguiente impacto público y mediático. Por ejemplo, como señalaron diversas fuentes de prensa, la marcha del 16 de Junio del 2011 sacó más de cien mil personas a las calles en varias ciudades del país, siendo considerada una de las más masivas desde el regreso a la democracia. En las manifestaciones del 30 de junio, este número se supera ampliamente, no solamente por la cantidad de manifestantes (se estimaron entre 200 y 400 mil en todo Chile), sino por la amplitud de la convocatoria (a los estudiantes secundarios y universitarios se sumaron asociaciones

de padres y apoderados, académicos, trabajadores, funcionarios públicos y otros sectores de la ciudadanía).

Diversos autores (Garcés, 2012; Mayol y Azócar, 2011; Mayol, 2012; Mira, 2011; Segovia y Gamboa, 2012) señalan que estas movilizaciones dan cuenta de una crisis de las instituciones y de un creciente malestar con el modelo económico y político. Como plantea Mayol (2012, p. 98) “el malestar dejó de mantener a los individuos adaptados y pasó a ser combustible de lo contrario, energía de disidencia, de ruptura, necesidad de cuestionarlo todo”. En este sentido las manifestaciones actuales vendrían a romper con la lógica de uso del espacio público para la expresión política de la ciudadanía propia de los años posteriores al fin de la dictadura, caracterizada por la apertura democrática, pero también por importantes restricciones al libre uso de este espacio para manifestarse y un ambiente de desmovilización promovido por los partidos en el poder (agrupados en la Concertación por la Democracia) de modo de no poner en peligro la transición democrática. Como plantea Moulian (1998),

para asegurar el retorno a la democracia, para evitar que los militares tuvieran argumentos para quedarse, era indispensable mantener la moderación, la centralización de las decisiones. Cualquier intento de movilizar fue motejado de peligroso en función de la ansiada materialización de la posibilidad democrática (p. 352).

Para Del Campo (2004) los partidos de la Concertación por la Democracia instauraron un modelo cultural orientado a la “reconciliación nacional”, caracterizado por el aplacamiento de la movilización social y la construcción de un nuevo tipo de ciudadanía, alejada de los conflictos políticos y sociales, y sometida a importantes restricciones en el uso del espacio público para manifestarse.

Para Opazo (2009), estas condiciones de gestión de la conflictividad social impuestas en los gobiernos de la Concertación junto con la crisis más global de la concepción moderna del espacio público como espacio de representación política, han llevado a un desperfilamiento de lo político entendido como participación ciudadana.

En el caso chileno, la disolución o suspensión prolongada de numerosos espacios de colectividad, particularmente aquellos vinculados a lo político, generó una transformación radical de las formas de lo político, donde lo público debió reinventarse desde lo domiciliario y las identidades políticas debieron reconstruirse desde lo más precario de los individuos, desde su materialidad, su corporalidad amenazada por la violencia de Estado (Opazo, 2009, p. 100).

Sin embargo, las manifestaciones actuales parecen dar cuenta, en el contexto chileno, de que los deseos de normalización de la ciudadanía post-dictatorial señalados por Del Campo (2004) han ido cediendo en la medida que efectivamente se ha avanzado en la democratización de la sociedad. Hoy en día, los deseos ciudadanos parecen apuntar más bien a la transformación de los aspectos negativos o insuficientes del sistema político y económico construido en los últimos veinte años.

En este trabajo se busca analizar algunos aspectos relativos al uso político del espacio público en las manifestaciones de los últimos años y cómo éstas han ido reconfigurando una ciudadanía que se había visto apartada de la conflictividad social y de uno de los espacios más relevantes de expresión de dicha conflictividad como es la ciudad. Este análisis se sustenta en datos obtenidos en una investigación sobre usos políticos del espacio público, particularmente en manifestaciones conmemorativas (Fernández, 2012).

Siendo el lugar de encuentro y expresión ciudadana por excelencia, el espacio público se entenderá no solamente como un espacio de circulación e interacción, sino como un espacio político, que tal como plantea Borja (2003), articula una dimensión gubernamental, propia de las instituciones del Estado y una dimensión propiamente ciudadana donde los movimientos sociales y las personas en general salen a la calle para aparecer en la escena pública y expresarse políticamente. Sin embargo, esta dimensión ciudadana del espacio público no es inherente a este espacio sino que es el resultado de una conquista. “La ciudadanía es una conquista cotidiana. Las dinámicas segregadoras, excluyentes, existen y se renuevan permanentemente. La vida social urbana nos exige conquistar constantemente nuevos derechos o hacer reales los derechos que poseemos formalmente” (Borja, 2003, p. 25). Pero esta conquista no solamente es una conquista del espacio público, sino también una conquista del derecho a la ciudad propuesto por Lefebvre (1976). Cuando los grupos humanos se encuentran imposibilitados de acceder al espacio donde se convergen las redes, los lugares y los intercambios sociales, estos grupos pasan a sufrir una exclusión social mucho más profunda que la mera exclusión espacial. En palabras de Lefebvre (1976, p. 19),

el hecho de excluir de lo “urbano” grupos, clases o individuos, viene a ser como excluirlos también de la civilización, si no de la sociedad. El derecho a la ciudad legitima el rechazo a dejarse apartar de la realidad urbana por una organización discriminatoria, segregativa.

Desde esta perspectiva, el espacio público es un espacio conflictivo y en pugna, en tanto los diferentes

sectores de la sociedad que convergen en él tienen posturas e intereses diferentes, que buscan instalarse y eventualmente sobreponerse a los otros. Sin embargo, siguiendo a Mouffe (1999, 2005), esta dimensión conflictiva se considera como necesaria y positiva en tanto que, en la medida que el conflicto es gestionado en un marco de aceptación de las diferencias y de las posturas minoritarias, puede contribuir al desarrollo y profundización de la democracia.

El espacio público como espacio en disputa

En Santiago de Chile, al igual que en otras ciudades capitales de América Latina, existen hitos urbanos que son reconocidos por la ciudadanía como lugares de manifestación política y social (Cruces, 1998a; Fernández, 2012). Uno de estos hitos urbanos más importantes es la Avenida Bernardo O'Higgins, conocida popularmente como la Alameda. Esta avenida atraviesa buena parte de la ciudad y conecta a otros dos hitos fundamentales como son el palacio presidencial de La Moneda y la Plaza Italia. Esta Plaza es frecuentemente ocupada para manifestaciones políticas así como para diversos festejos culturales y deportivos, mientras que La Moneda, en tanto sede de gobierno, es escenario recurrente de diversas acciones de protesta (Fernández, 2012; Rojas, 2007). Como señalan diversos autores, los espacios del poder suelen ser utilizados para la interpelación a las autoridades por parte de sectores sociales descontentos (Borja, 2003; Borja y Muxí, 2003; Cruces, 1998b).

El desplazamiento de manifestantes desde Plaza Italia hasta el entorno del palacio presidencial, si bien no es el único recorrido que se realiza en manifestaciones políticas, es el más recurrente y significativo desde el regreso a la democracia (Fernández, 2012). En este sentido, dicho recorrido se encuentra instalado en el imaginario social como la forma más adecuada y pertinente de manifestarse, considerando no solamente los aspectos simbólicos asociados a estos lugares sino también la carga histórica que tiene el centro de Santiago y particularmente la Alameda, escenarios de los hechos más significativos de la historia reciente de nuestro país. En entrevistas realizadas a activistas pertenecientes a diferentes organizaciones sociales y políticas que realizan manifestaciones en Santiago (Fernández, 2012), los significados relativos al valor que se le asigna a ocupar la Alameda tienen directa relación con el impacto visual y mediático que conlleva desplazarse por el principal eje vial de la ciudad y con algunos hechos históricos relevantes. De este modo, ocupar este espacio de la ciudad conlleva una dimensión escénica que permite ser visto masivamente por quienes circulan por el centro de la ciudad, ser registrado por los medios de comunicación y hacerse parte de un entorno en el cual no solamente se

encuentra la sede de gobierno, sino también edificios emblemáticos como la Biblioteca Nacional, las casas centrales de las Universidad de Chile y Católica, así como varios ministerios y servicios públicos. Asimismo, hacerse presente en la Alameda se considera como una práctica ciudadana propia de la lucha contra la dictadura y del regreso a la democracia.

En un sentido más general, esto refleja que en las sociedades modernas la idea de descender a las calles y marchar por ellas, particularmente en las calles con alto significado urbano y simbólico como en este caso, está intrínsecamente ligada a la idea de manifestarse. Como señala Tarrow (2004, p. 142) "la alteración del orden público es la expresión arquetípica de los grupos disconformes". Para este autor, esta alteración no supone necesariamente una amenaza al orden público, pero sí implica, junto con visibilizar el conflicto, la determinación de los manifestantes y la obstrucción del normal desarrollo de actividades y rutinas cotidianas. En definitiva, la manifestación en el espacio público es una forma de ritual civil que tiene como razón de ser, como señala Cruces (1998a):

Integrar las acciones de la multitud de modo tal que el mero "desorden" se transforme en "demanda" —es decir un mensaje políticamente procesable dentro de la esfera pública. Hacer marchas es un modo prefijado de incorporarse al imaginario político moderno, de ejercer en forma simbólica la ciudadanía y de expresar valores cívicos (p. 34).

Desde el regreso a la democracia el año 1990, los rituales de ocupación política del espacio público en manifestaciones políticas se han reconfigurado en varios sentidos (Fernández, 2012). Por una parte, además de los actores sociales que históricamente se han manifestado en el espacio público, como trabajadores y estudiantes, en la actualidad se manifiestan otros actores que han ido cobrando una visibilidad que no tenían con anterioridad, como gays y lesbianas, mapuches y ecologistas entre otros. Por otra parte, los repertorios de acción utilizados en las manifestaciones se han diversificado desde acciones tradicionales de la manifestación moderna, como marchar, gritar consignas, llevar banderas, lienzos y pancartas, a acciones de carácter más artístico, festivo y carnavalesco. Así, ya no resulta sorprendente encontrar en diferentes manifestaciones políticas grupos de teatro, de música y de baile. Esto coincide con lo señalado por autores como Cruces (1998b) y Delgado (2007) respecto de las transformaciones actuales en la concepción del espacio público y su ocupación por parte de los ciudadanos.

Sin embargo, en Chile y particularmente en Santiago, la masividad de las manifestaciones de los últimos años ha tenido como respuesta institucional una serie de

restricciones para el uso del centro de la capital para manifestarse, bajo el argumento del mantenimiento del orden público. Para esto el gobierno del presidente Piñera, al igual que los anteriores gobernantes de la Concertación, ha hecho uso del Decreto 1086 para regular el permiso a manifestarse en el espacio público. Este decreto, impuesto por Pinochet para reprimir las protestas a la dictadura durante los años ochenta, se ha mantenido vigente desde entonces y permite prohibir la realización de manifestaciones (Fernández, 2012).

Esta prerrogativa ha sido aplicada en varias ocasiones, lo cual ha tenido como efecto tensiones e incluso enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas policiales. Un ejemplo del uso de este decreto ha sido la prohibición de realizar algunas manifestaciones conmemorativas del golpe de Estado de 1973 en el centro de Santiago (Escobar y Fernández, 2008). En esas ocasiones, se ha restringido parcialmente o totalmente la circulación por el entorno de La Moneda y las fuerzas policiales han detenido a manifestantes que han intentado sobrepasar el cerco establecido. Otro ejemplo, en el contexto de las manifestaciones estudiantiles del año 2011, fue la prohibición de realizar una marcha de estudiantes convocada en Plaza Italia el 04 de agosto del 2011. En esa ocasión, los estudiantes congregados en el lugar fueron violentamente reprimidos, registrándose detenidos, personas heridas y escaramuzas por amplios sectores del centro de Santiago, lo que llevó a la prensa de hablar de la “batalla por la Plaza Italia”. Esto también generó un importante rechazo ciudadano que se materializó en un “cacerolazo”, forma de manifestación propia de la lucha contra la dictadura consistente en hacer sonar cacerolas y otros artefactos domésticos de modo de expresar pacíficamente el descontento a través del ruido en los diferentes barrios de la ciudad. Este “cacerolazo” fue el primero desde el regreso a la democracia (después de este hito se ha vuelto a realizar en algunas ocasiones) y evidenció el alto apoyo ciudadano a las demandas estudiantiles (Mayol y Azócar, 2011; Mayol, 2012).

La lucha por la Plaza Italia durante las movilizaciones estudiantiles es uno de los tantos ejemplos que remiten a la conflictividad propia del uso político de los espacios públicos, particularmente los que se identifican por parte de la ciudadanía como espacios pertinentes y adecuados para manifestarse. Por una parte los manifestantes buscan ocupar esos espacios, alterando sus usos cotidianos y transgrediendo las normas que los rigen. Por otra parte, las autoridades buscan mantener el orden, lo cual muchas veces implica tensiones e incluso enfrentamientos entre las fuerzas policiales y quienes se manifiestan. En este sentido, las pugnas por la ocupación del espacio público para manifestarse permiten destacar un elemento fundamental de este espacio urbano contemporáneo: es un espacio en

disputa. Desde 1990, esta disputa se ha dado en un marco democrático pero con importantes restricciones como las señaladas anteriormente. Para activistas pertenecientes a diferentes organizaciones sociales y políticas que realizan manifestaciones en Santiago, estas restricciones se consideran como propias de una democracia incompleta o insuficiente que limita el legítimo derecho a manifestarse y a ocupar los espacios públicos para expresarse políticamente (Fernández, 2012). Sin embargo, estos activistas también señalan que los movimientos sociales se han ido sobreponiendo a estas restricciones y han logrado apropiarse del espacio público, logrando además altas convocatorias en sus manifestaciones. Si bien no establecen cifras precisas, estiman que manifestaciones como la marcha del Orgullo Gay y la marcha organizada por organizaciones mapuches para protestar contra la conmemoración del descubrimiento de América cada 12 de octubre reúnen a varias decenas de miles de personas.

Siguiendo a Salcedo (2002), podemos entender la noción de espacio en disputa como la tensión existente entre prácticas de dominación y prácticas de resistencia, las que no se oponen a las primeras como sistemas o estructuras de poder, sino a través de la apropiación y transformación de los usos y significados socialmente dominantes que definen al espacio. En palabras de Salcedo (2002, p. 14) “el espacio (público o no público) es siempre discutido en su uso, y por ende nunca puede ser completamente apropiado por los poderes y discursos dominantes”. Salcedo (2002) distingue el ejercicio del poder y el ejercicio de la resistencia como dos prácticas que se contraponen y van definiendo de manera dinámica al espacio público, considerando la perspectiva de De Certeau (2000) sobre las prácticas urbanas. Este autor entiende estas prácticas, como el andar por la ciudad, como prácticas cotidianas susceptibles de escapar del disciplinamiento propio del espacio urbano y por lo tanto constituirse en prácticas de resistencia. Es decir que este espacio organiza un conjunto de posibilidades y prohibiciones a las cuales el caminante puede someterse u oponerse. En la mayor parte de las manifestaciones políticas se produce una ocupación de las calles que, como mínimo, altera la normatividad que define la circulación peatonal y vehicular y, si bien este tipo de manifestaciones no se inscribe propiamente dentro de la cotidianidad que es foco del trabajo de De Certeau (2000), sí remite a la idea de espacio en disputa, donde los ciudadanos pueden lograr el poder suficiente “para transformar críticamente los usos y significados del espacio propuestos por los productores” (Salcedo, 2002, p. 15), es decir por quienes tienen el poder de definir esos usos y significados.

Como sostienen diversos autores (Delgado, 2007; Borja, 2003; Borja y Muxí, 2003; Reguillo, 2005), las manifestaciones en el espacio público visibilizan su carácter conflictivo en tanto es en él donde se escenifican y representan las problemáticas no resueltas de la sociedad, la marginación social, cultural y política de diversos sectores sociales y el esfuerzo de éstos por hacer presentes y visibles, mostrando sus problemas, haciendo explícitas sus posturas e instalando sus puntos de vistas, así como sus memorias y visiones sobre el pasado y el presente. Relevan al espacio público como lugar donde se produce y se ejerce la ciudadanía, como sostienen Borja y Muxí (2003):

El lugar de la política de proximidad, de autogobierno, de las instituciones político jurídicas y también de la auto-representación de la sociedad, de la expresión de las demandas colectivas, de las movilizaciones sociales, de los cambios en las relaciones de poder, de las innovaciones culturales y políticas. Es decir la polis es el lugar del poder, de la participación y de la representación a través de las instituciones, y también de la oposición al poder y de los cambios en el poder (p. 107).

Es el lugar del poder, pero también del conflicto y de la resistencia, el espacio de las protestas y de las movilizaciones sociales. Para Reguillo (2005), el espacio público es un espacio conflictivo que se define por la tensión entre las instituciones y los movimientos sociales. Una clave de esta tensión es el acceso de los sectores sociales a lo público, espacio generalmente monopolizado por el estado y los grupos dominantes. Como señala la autora:

La plaza, el mercado, las calles y el atrio de las iglesias estaban hechos para el encuentro, para el gozo o el enojo colectivos, para informarse de los sucesos importantes para la comunidad, formarse un juicio compartido sobre los hechos, ventilar diferencias. Pero esta manera de “publicidad” es colectiva y lo colectivo es peligroso porque no es uniforme (Reguillo, 2005, p. 72).

Por lo tanto, la conflictividad del espacio público no sería una situación puntual o específica sino que sería inherente a este espacio concebido en términos ciudadanos. Como señala Borja (2003, p. 25):

El ciudadano lo es en tanto que ejerce de ciudadano, en tanto que es un ciudadano activo, partícipe de la conflictividad urbana (...) un desarrollo pleno de la ciudadanía se adquiere por medio de una predisposición para la acción, la voluntad de ejercer las libertades urbanas, de asumir la dignidad de considerarse igual a otros (p. 25).

Sin embargo, las expresiones ciudadanas de descontento suelen ser vistas de manera negativa por las autoridades, y tal como se ha visto el 2011, muchas de las manifestaciones suelen terminar siendo reprimidas por las fuerzas de orden. Esta situación no es nueva, sino que ha sido transversal a todos los gobiernos de la Concertación. “La calle, no obstante han pasado dos décadas desde el retorno a la democracia, sigue siendo un lugar prohibido para el ejercicio de la manifestación política y el legítimo derecho a la expresión de la protesta ciudadana” (Opazo, 2009, p. 126).

Esta situación puede explicarse en función de las concepciones dominantes actuales de lo político y del espacio público, las cuales según Mouffe (1999, 2005) tienden a asentarse en una mirada consensualista, donde los conflictos sociales deben resolverse por la vía del diálogo y el acuerdo, lo que implica una anulación del conflicto. Al no existir condiciones para el acuerdo y el consenso, el conflicto se resuelve a través del ejercicio de la autoridad, expresada en control y represión del uso político de los espacios; lo que Tartakowsky (2010, p. 276) llama “pacificación del espacio público”.

Una de las expresiones más evidentes de esta dimensión normativa del uso de los espacios públicos, junto con el control y represión de las manifestaciones, es el cierre de calles y sectores conflictivos, como es el caso de las Plazas de la Constitución y de la Ciudadanía, plazas que se ubican en entorno inmediato de La Moneda. En su investigación sobre la restricción de los espacios públicos, Rojas (2007) muestra cómo la Plaza de la Ciudadanía, pensada y publicitada como un espacio público emblemático de la ciudad, se encuentra frecuentemente cerrada, parcial o totalmente, al tránsito peatonal por razones de seguridad. Como señala Opazo (2009), este espacio de pretensiones supuestamente ciudadanas “es inaccesible a los ciudadanos la mayor parte del tiempo” (Opazo, 2009, p. 180). Asimismo, otras investigaciones han mostrado cómo manifestaciones que se desarrollan en el entorno del palacio presidencial se ven frecuentemente limitadas y/o reprimidas por las fuerzas policiales, como por ejemplo en el caso de la marcha conmemorativa del golpe de Estado de 1973 (Escobar y Fernández, 2008).

Malestar, ciudad y ciudadanía

Para diversos autores, las manifestaciones actuales son la expresión de una relación cada vez más problemática entre la ciudadanía y el sistema político (Garcés, 2012; Mayol y Azócar, 2011; Mayol, 2012; Mira, 2011; Segovia y Gamboa, 2012), tanto por la falta de representatividad del sistema político respecto de las necesidades ciudadanas, como por la generalización de un malestar

que algunos atribuyen a las características del modelo heredado de la dictadura y gestionado por los gobiernos de la Concertación (Mayol, 2012). Desde este punto de vista, es factible pensar que una mayor sintonía entre las necesidades ciudadanas y el sistema político pueda generar una mayor articulación de la protesta ciudadana dentro de un marco de preservación e incluso ampliación de los derechos urbanos, marco que permita las legítimas expresiones de descontento y de afirmación de ciertos grupos sociales. Es decir, que, por una parte, se resguarde la seguridad del conjunto de personas que circulan por los espacios públicos, pero, por otra parte, que se le dé cabida a las expresiones ciudadanas, posibilitando la participación y la incidencia en el debate político relativo a las problemáticas relevantes de nuestro país.

Cabe destacar que si bien las expresiones de descontento ciudadano han adquirido mayor visibilidad con las manifestaciones del 2011, éstas se han desarrollado con mayor o menor intensidad desde el regreso a la democracia en el año 1990, aunque sin la cobertura mediática y el impacto social que están teniendo en la actualidad. Las marchas y tomas de establecimientos escolares por parte de estudiantes secundarios, conjunto de hechos conocidos como la revolución pingüina del 2006, puede considerarse como hito al respecto, que antecedió las manifestaciones del 2011 (Garcés, 2012). Tal como se ha establecido en investigaciones sobre manifestaciones políticas en el espacio público (Escobar y Fernández, 2008; Fernández, 2012), las manifestaciones de carácter reivindicativo, es decir las que se desarrollan en torno a demandas específicas, se han visto acompañada de otro tipo de manifestaciones que han ido fortaleciendo a los movimientos sociales y han permitido la expresión pública del creciente malestar social que se viene incubando desde ya varios años. Estas manifestaciones son las conmemorativas, es decir manifestaciones que desarrollan año a año los movimientos sociales en torno a alguna fecha conmemorativa. En Chile, las conmemoraciones más importantes han sido el Día Internacional de la Mujer, el Día Internacional del Trabajador, la marcha conmemorativa del 11 de septiembre, la marcha gay y la marcha de los pueblos originarios los 12 de octubre (Fernández, 2012). Este tipo de manifestación puede definirse según Delgado (2007) como:

Una especie de monumento dramático en que un grupo reunido se arroja la representación de colectivos humanos víctimas de un determinado agravio histórico que, en la medida en que no se ha reparado, ha de ver recordada cada año su situación de pendiente de resolución. Los congregados evocan una herida infligida, una derrota injusta, una ofensa crónica, pero no se presentan como una colectividad contingente, sino como la epifanía de un sector de ciudadanos

habitualmente invisibilizados en su identidad y que tienen en común algo más que sus vindicaciones (p. 171).

En este sentido, las manifestaciones conmemorativas pueden concebirse como una forma específica de ocupación política del espacio público, en la cual “a través de la acción simbólica, una multiplicidad de grupos desarrolla distintas puestas en escena de lo que son, de lo que han sido y de lo quieren ser” (Cruces, 1998a, p. 27). En Chile, en estas manifestaciones conmemorativas diferentes sectores sociales vinculados al sindicalismo, a la comunidad gay y lesbica, a los pueblos originarios, a grupos ecologistas y organizaciones políticas y de derechos humanos, desarrollan manifestaciones de diverso tipo en las cuales se visibilizan desde sus identidades y reivindicaciones compartidas, a la vez que cuestionan aspectos particulares o globales del sistema político y económico. Para estos sectores, las conmemoraciones han sido un espacio fundamental de consolidación de los movimientos sociales que participan de ellas, de reconocimiento público de sus características y demandas, y de ampliación y fortalecimiento del derecho ciudadano a manifestarse (Fernández, 2012).

La relevancia de estas manifestaciones es que han ido configurando un modo de expresión ciudadana y uso político del espacio público que ha permeado las manifestaciones actuales, particularmente las del movimiento estudiantil. El uso de repertorios de acción colectiva que van más allá de los clásicos rituales de manifestación como marchar, gritar consignas o enfrentarse con las fuerzas policiales han nutrido las movilizaciones recientes. Así, el uso de disfraces, la realización de acciones performativas, artísticas y teatrales le han otorgado un perfil diferente, el cual ha tenido una recepción positiva por parte de la ciudadanía. Podemos recordar entre las acciones más destacadas el baile masivo de estudiantes frente al palacio de La Moneda (conocido como “Thriller por la Educación”) y la “Besatón por la Educación” en la Plaza de Armas de la capital, donde parejas se besaban públicamente como una forma de apoyar el movimiento estudiantil.

Para Mayol y Azócar (2011), las expresiones del malestar ciudadano que se han desarrollado con mayor fuerza desde el año 2011 se encuentran en directa relación con la incapacidad política de dar respuestas institucionales a dicho malestar. “Lo fundamental ha sido la caída del cobijo simbólico de los ciudadanos en las instituciones” (Mayol y Azócar, 2011, p. 172). Es decir, que las instituciones políticas, al no tener la capacidad de satisfacer las demandas ciudadanas, han generado condiciones favorables para que estas demandas se canalicen a través de la acción ciudadana en las calles, la cual muchas veces cobra expresiones inorgánicas y

violentas. Estas expresiones evidencian que el descontento social no solamente tiene un carácter racional sino también afectivo y pasional (Mouffe, 1999, 2005). Para esta autora lo relevante para las sociedades democráticas es darle cabida a esas racionalidades y pasiones en un marco que preserve los principios básicos de convivencia ciudadana. Para Cruces (1998b), este marco dice relación con la existencia de lo que denomina mínimos comunes. En tanto la pluralidad de necesidades y aspiraciones que se expresan en el espacio público no permiten pensar en un bien común de carácter homogéneo e universal, se hace necesario establecer elementos comunes mínimos que permitan reunir a la ciudadanía desde su pluralidad. En palabras de Cruces (1998b, p. 244) “ciudadano no es ya lo que tiene que ver con la pertenencia cultural y política, sino con la posibilidad de compartir un mismo espacio”. Como señala Cruces (1998b) las manifestaciones actuales se sustentan en una transformación de la noción tradicional de “bien común”, entendida como lo que beneficia a todos los miembros de una sociedad (y por lo tanto de carácter uniforme), por una perspectiva orientada al respeto a la diferencia y lo particular. Así, la creciente fragmentación de los actores sociales que se manifiestan en el espacio público se articula en torno a un respeto por los otros que se constituye en una suerte de bien común compartido.

Los planteamiento de Cruces (1998a, 1998b) permiten relativizar afirmaciones como las de Opazo (2009) para quién la ocupación actual del espacio público, caracterizada por “una desagregación y desafección de lo sujetos, transformados en cuerpos discretos (y precarios)” (Opazo, 2009, p. 190), no se ha desarrollado en torno al debate sobre “la invención de lo común” (Opazo, 2009, p. 201). Las manifestaciones actuales se relacionan con temáticas bastante diversas (educación, ecología y defensa de recursos naturales, derechos y reivindicaciones de sectores sociales históricamente excluidos como los homosexuales y los pueblos originarios, etc.) no permiten sostener la idea de que exista algo común a todos los sectores que se manifiestan, solamente si es que entendemos aquello común desde la perspectiva tradicional de bien común, la que supone una ciudadanía homogénea y con necesidades y aspiraciones de carácter universal.

Buena parte de los planteamientos sobre el espacio público contemporáneo se sustentan en la idea de que es un espacio urbano donde las personas se encuentran en su diversidad y diferencia, en una lógica de visibilidad generalizada como plantea Delgado (2007). Siguiendo a Arendt (2005), el espacio público se construye como espacio común justamente en la medida que los ciudadanos aparecen unos ante otros e interactúan políticamente entre sí. Como señala la autora:

La polis, propiamente hablando, no es la ciudad – estado en su situación física; es la organización de la gente tal como surge de actuar y hablar juntos (...) Se trata del espacio de aparición en el más amplio sentido de la palabra, es decir, el espacio donde yo aparezco ante otros, como otros aparecen ante mí, donde los hombres no existen meramente como otras cosas vivas o inanimadas, sino que hacen su aparición de manera explícita (Arendt, 2005, p. 221).

Para Mouffe (1999), la identificación común de una ciudadanía plural debiera darse en el marco de ciertos valores propio de una comunidad política constituida en torno a ideales democráticos que permita la expresión de dicha pluralidad. “Esta forma moderna de comunidad política no se mantiene unida por una idea sustancial del bien común, sino por un vínculo común, una preocupación pública” (Mouffe, 1999, p. 98). La autora sitúa dicha preocupación en la construcción de lo común a partir de lo diverso y lo conflictivo. En sus palabras “la vida política concierne a la acción colectiva, pública; apunta a la construcción de un “nosotros” en un contexto de diversidad y de conflicto” (Mouffe, 1999, p. 100).

Conclusiones

Las manifestaciones del 2011 en muchos países, y por cierto en Chile, han obligado a repensar drásticamente el espacio público, sus características y sus usos políticos. Sin embargo, el desafío parece también estar en poder comprender sucesos ocurridos previamente al estallido del 2011, como son las manifestaciones conmemorativas que se comentaron, así como otras experiencias en las cuales se fueron gestando las actuales expresiones de descontento y de reconfiguración ciudadana. Dicha comprensión cobra nuevas perspectivas a la luz de los hechos actuales, los que parecen dar cuenta de la emergencia de un nuevo ciclo político caracterizado por una mayor participación ciudadana. Como señala Mayol en relación a las manifestaciones estudiantiles del 2011:

Es la polis que renace, la simple política de toda la vida, la que apela a la coordinación y el conflicto, la que asume las dificultades y las oportunidades de la vida en su conjunto. Nuestra transición redujo la política a los palacios y a las políticas públicas (...) Durante todo este tiempo, la dimensión de la ciudadanía estaba postergada, la polis había sido suspendida. El movimiento estudiantil reactivó la política, entregó oxígeno y sangre a una sociedad que habitaba una democracia dañada. La mayor parte de los chilenos consideraba que no se había avanzando en democratizar Chile (Mayol, 2012, p. 88).

Cabe destacar que si bien el movimiento estudiantil del 2011 efectivamente operó como una suerte de estallido social, se puede afirmar que dicho movimiento no reactivó la política, sino que más bien fue el resultado de un proceso de transformación ciudadana que se fue gestando al menos en parte bajo la influencia de los movimientos sociales que se han mantenido activos durante todos estos años, que han sostenido e incluso ampliado la ocupación de los espacios públicos y que han promovido una re-politización de la acción ciudadana. En este marco sostenido de acción política en el tiempo, la ocupación de los espacios urbanos y particularmente la realización de manifestaciones conmemorativas parecen jugar un rol fundamental tanto en la constitución de estos sujetos como sujetos políticos y ciudadanos como en sus formas de aparecer y visibilizarse en el espacio público.

Comprender las nuevas formas de ocupación política del espacio público en el contexto actual debe contribuir no solamente a un conocimiento más elaborado, sistemático y actualizado de estos fenómenos urbanos que pueda sustentar y apoyar las acciones que emprenden los distintos actores y movimientos sociales, sino también promover una mirada de la ciudad que se inscriba en el horizonte emancipador que la ha definido a través de su historia y que contribuya a ampliar ese horizonte en el marco de las crecientes demandas tanto nacionales como internacionales por una mayor democratización de las sociedades. Como señala Borja (2003, p. 33):

La ciudad nos hace libre si podemos acceder a las teóricas libertades urbanas. Por ello debe cumplirse condiciones mínimas de organización física e institucional. Las alamedas por donde transitaran

hombres y mujeres libres e iguales que anunciaba Salvador Allende en su último mensaje son una metáfora, pero también una realidad física (...) La ciudad es el lugar del cambio histórico, de su materialización, el lugar de la manifestación con o contra el poder, de conquista de derechos. Todas las revoluciones democráticas se vinculan a la conquista del espacio público ciudadano por parte de las mayorías populares (p.33).

En este sentido las manifestaciones contemporáneas no solamente cuestionan el orden social sino que favorecen la apropiación ciudadana de los espacios públicos, lo cual constituye un derecho urbano fundamental, pero también una vía para transformaciones sociales de mayor alcance (Lefebvre, 1976). Como señala Delgado (2007, p. 260), “a pesar de las exclusiones y las vigilancias que la afectan, la vida en la calle es el proscenio natural para la emancipación, la redefinición y el cambio”. Los manifestaciones del año 2011 y las que se han desarrollado con posterioridad en Chile y en varios otros países muestran que no solamente la pugna por el espacio público sigue vigente, sino que se ha convertido en un ámbito fundamental de las luchas por la democratización de las sociedades y de la reconfiguración del lugar del ciudadano en el sistema de toma de decisiones políticas. Así, es en el espacio público donde se siguen dando, como sostiene Delgado (2007):

Nuevos pasos en pos de la conquista de una ciudadanía sin excepciones, entendiendo ciudadanía no como una entidad pasiva, sino como un tema central de y para una práctica incansable e infinita en aras de la igualdad, como estrategia hacia una democracia furiosa y como argumento inagotable para la desobediencia (p. 261).

Referencias

- Arendt, H. (2005). *La condición humana*. Buenos Aires: Paidós, estado y sociedad.
- Benski, T, Langman, L., Perugorría, I., y Tejerina, B. (2013). From the streets and squares to social movement studies: What have we learned? *Current sociology*, 61(4), 451-561. doi: 10.1177/0011392113479753
- Borja, J. (2003). *La ciudad conquistada*. Madrid: Alianza.
- Borja, J., y Muxí, Z. (2003). *El espacio público: Ciudad y ciudadanía*. Madrid: Alianza.
- Crawford, M. (1995). Contesting the public realm: Struggles over public space in Los Angeles. *Journal of Architectural Education*, 49(1), 4-9. doi: 10.2307/1425371
- Cruces, F. (1998a). El ritual de la protesta en las marchas urbanas. En N. García Canclini (Ed), *Cultura y comunicación en Ciudad de México*. Vol. 2 (pp. 27-83). México DF: Grijalbo.
- Cruces, F. (1998b). Las transformaciones de lo público. Imágenes de protesta en la ciudad de México. *Perfiles Latinoamericanos*, 12, 227-56.
- De Certeau, M. (2000). *La invención de lo cotidiano 1: Artes de hacer*. México: Universidad Iberoamericana.
- Decreto 1086 Sobre Reuniones Públicas. (1983, 16 de septiembre). Ministerio del Interior, Chile. *Diario Oficial de la República de Chile*. Recuperado de <http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=16783&idVersion=1989-10-10&idParte=%20Del%20C>
- Del Campo, A. (2004). *Teatralidades de la memoria: Rituales de reconciliación en el Chile de la transición*. Santiago: Mosquito Comunicaciones.

- Delgado, M. (2007). *Sociedades movedizas. Pasos hacia una antropología de las calles*. Barcelona: Anagrama.
- Escobar, M., y Fernández, R. (2008). Performatividad, memoria y conmemoración: La experiencia de la marcha Rearme en el Chile post-dictatorial. *Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative social research*, 9(2), Art. 36. Recuperado de <http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/389>
- Fernández, R. (2012). *Manifestaciones conmemorativas, rituales ciudadanos y producción del espacio público. Santiago de Chile 1990-2010* (tesis doctoral inédita). Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile.
- Garcés, M. (2012). *El despertar de la sociedad. Los movimientos sociales en América Latina y Chile*. Santiago: LOM.
- Lefebvre, H. (1976). *Espacio y política: el derecho a la ciudad*. Barcelona: Península.
- Mayol, A. (2012). *El derrumbe del modelo*. Santiago: LOM.
- Mayol, A., y Azócar, C. (2011). Politización del malestar, movilización social y transformación ideológica: El caso Chile 2011. *Polis (Santiago)*, 10(30), 163-184.
- Mira, A. (2011). Crisis de representatividad y estallido social. Una aproximación a la actual experiencia chilena. *Polis (Santiago)*, 10(30), 185-197.
- Mouffe, C. (1999). *El retorno de lo político. Comunidad, ciudadanía, pluralismo, democracia radical*. Barcelona: Paidós.
- Mouffe, C. (2005). Política y pasiones: Las apuestas de la democracia. En L. Arfuch (Eds.), *Pensar este tiempo. Espacios, afectos, pertenencias* (pp. 75 – 97). Buenos Aires: Paidós.
- Moulian, T. (1998). *Chile actual. Anatomía de un mito*. Santiago: LOM-ARCIS.
- Opazo, D. (2009). *Espacio transitorio. Producción, prácticas y representaciones del espacio público político en Santiago de Chile: 1983-2008* (tesis doctoral inédita). Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile.
- Reguillo, R. (2005). *La construcción simbólica de la ciudad. Sociedad, desastre, comunicación*. Guadalajara: ITESO/Universidad Iberoamericana.
- Rojas, J. P. (2007). *Espacio público, seguridad y restricción: el caso de la Plaza de la ciudadanía como espacio público de uso restringido* (tesis de magister inédita). Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile.
- Roitman, M. (2011). Los indignados: El retorno de la política. *Diario La Vanguardia*. Recuperado de <http://www.vanguardia.com.mx/losindignadoselretornodelapolitica-1108798.html>
- Roitman, M. (2012). *Los indignados. El rescate de la política*. Madrid: Akal Pensamiento Crítico.
- Salcedo, R. (2002). El espacio público en el debate actual: Una reflexión crítica sobre el urbanismo post-moderno. *Eure*, 28(84), 5-19. doi: 10.4067/S0250-71612002008400001
- Segovia, C., y Gamboa, R. (2012). Chile: El año en que salimos a la calle. *Revista de Ciencia Política*, 32(1), 65-85.
- Tarrow, S. (2004). *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*. Madrid: Alianza.
- Tartakowsky, D. (2010). *Manifestar à Paris, 1880-2010*. France: Editions Champ Vallon.